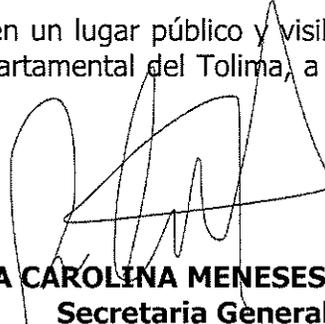


 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	REGISTRO NOTIFICACION POR ESTADO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL		
	Proceso: GE – Gestión de Enlace	Código: RGE-25	Versión: 02

SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACION POR ESTADO

CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN	
TIPO DE PROCESO	Ordinario de Responsabilidad Fiscal
ENTIDAD AFECTADA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA
IDENTIFICACION PROCESO	112-036-021
PERSONAS A NOTIFICAR	JHON WILSON ALVAREZ RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 93.395.646 y OTROS; así como A LA COMPAÑÍA LA PREVISORA S.A. identificada con Nit, 860.002.400-2, por intermedio de su apoderado de confianza el Dr. OSCAR IVAN VILLANUEVA SEPULVEDA
TIPO DE AUTO	AUTO DE PRUEBAS NÚMERO 039
FECHA DEL AUTO	04 DE JULIO DE 2025
RECURSOS QUE PROCEDEN	NO PROCEDE RECURSO ALGUNO

Se fija el presente **ESTADO** en un lugar público y visible de la Cartelera de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, a las 07:00 a.m., del día 07 de julio de 2025.


DIANA CAROLINA MENESES ESCOBAR
Secretaria General

NOTA DE DESFIJACION DEL ESTADO

El presente **ESTADO** permaneció fijado en un lugar público y visible de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, desde la hora y fecha fijada hasta el día 07 de julio de 2025, a las 06:00 p.m.

DIANA CAROLINA MENESES ESCOBAR
Secretaria General

458

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

AUTO DE PRUEBAS NUMERO 039 DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL RADICADO No. 112-036-021 ADELANTADO ANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL – TOLIMA

Ibagué, cuatro (04) de julio de 2025

Los suscritos funcionarios de conocimiento y sustanciador de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima, en virtud de la competencia establecida en la Ley 610 de 2000 y la comisión otorgada mediante el Auto de Asignación No. 074 del 15 de abril de 2021, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal No. 112-036-021, proceden a decretar pruebas de oficio, dentro del proceso de la referencia.

CONSIDERACIONES

Motiva la iniciación del Proceso de Responsabilidad Fiscal ante la Administración Municipal de Armero Guayabal – Tolima, los hechos puestos en conocimiento, mediante memorando CDT-RM-2021-00000644, suscrito por la Directora Técnica de Participación Ciudadana, con fecha de radicado del 15 de febrero de 2021, a través del cual remite a esta Dirección el hallazgo fiscal No.019 de 2021 y sus anexos, correspondiente al resultado de la Auditoría Express, hallazgo que se depone en los siguiente términos:

"(...)

La Administración Municipal de Armero Guayabal, presenta a consideración del ente de control a través del oficio radicado el 17 de marzo de 2020, las irregularidades en el proceso de recuperación de recursos por concepto de cartera del impuesto predial.

Que el total de la cartera según reporte de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Armero Guayabal de las vigencias 2011 al 2015 asciende a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$656.895.031).

De acuerdo a la revisión de las vigencias no existe caducidad conforme se encuentra estipulado en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 127 del Decreto-Ley 403 de 2020, toda vez que la cartera corresponde a las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014 Y 215

De la caducidad de la acción fiscal en el Decreto-Ley 403 de 2020

En cuanto a la caducidad establecida en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 127 del Decreto-Ley 403 de 2020, este Despacho en concepto 110.35.2020 del 04 de agosto de 2020 (Radicado No: 20201100018811), se pronunció en los siguientes términos:

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

El cambio normativo tiene dos aspectos: i) la ampliación del término de caducidad que pasa de cinco (5) años a diez (10) años contados a partir de los hechos generadores del daño patrimonial y ii) se puntualiza el que la promulgación del auto de apertura, interrumpe el término de caducidad de la acción fiscal.

(...)

El legislador excepcional del Decreto-Ley 403 de 2020, no condicionó de manera especial la entrada en vigencia de este cambio normativo procesal como si lo hizo en otras normas de este carácter, por lo tanto, se debe entender su entrada en vigencia en los términos del artículo 166 ibídem, es decir, a partir de la promulgación de la norma, esto es, a partir del 16 de marzo de 2020.

(...)

De la transcripción normativa, jurisprudencial y conceptual transcrita, este Despacho concluye que el fenómeno jurídico de la caducidad se encuentra dentro del derecho procesal, por tanto su naturaleza es de orden público y por ello irrenunciable; establecida como garantía para la seguridad jurídica y el interés general, consistente en el establecimiento de un plazo determinado para poder ejercer una acción para exigir un derecho y en el caso del control fiscal, el tiempo con que cuenta el organismo de control fiscal para dar inicio al respectivo proceso de responsabilidad fiscal contra los presuntos responsables del detrimento patrimonial al Estado observado.

El término de caducidad en el tránsito legislativo se debe aplicar de acuerdo a dos hipótesis: i) Si el término de caducidad establecido en la norma anterior se encuentra vencido al momento de entrada en vigencia de la nueva norma, se aplica la norma anterior teniendo en cuenta la consolidación de tal figura jurídica y por ende la imposibilidad de incoar la acción fiscal; y ii) Si al momento de entrar en vigencia la nueva norma, el término de caducidad establecido en la norma anterior no se había vencido, la aplicación para su conformación es la de la nueva normatividad en el entendido que aún no se ha consolidado la figura jurídica llamada caducidad y por tanto aún se está frente a una mera expectativa de que ésta se materialice.

En los anteriores términos consideramos atendidas sus inquietudes, esperando haber dado claridad sobre las mismas, manifestándole además que la señora Auditora General de la República en cumplimiento de las disposiciones del Decreto-Legislativo 491 de 2020, expidió la Resolución Reglamentaria No. 005 del 31 de marzo de 2020 "Por la cual se modifica la Resolución Reglamentaria No. 004 de 2020 y se toman otras medidas por motivos de salubridad pública.", autorizando en su artículo 4º, el uso de la firma escaneada por parte de los directivos de la entidad en los documentos dirigidos a los usuarios, y en el artículo 5º su comunicación y notificación a través de medios electrónicos (dirección electrónica).

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", con

Página 2 | 11

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL		
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
	AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

carácter orientador tal como lo determina la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Consejo de Estado en Auto del 19 de mayo de 2016 dentro del expediente radicado 20392 -25000-23-37-000-2012-00320-01:

[...]

*Teniendo en cuenta el concepto emitido por la AGR, para este ente de control es claro que el término de la caducidad se debe aplicar de acuerdo a la hipótesis de que "Si el término de caducidad establecido en la norma anterior se encuentra vencido al momento de entrada en vigencia de la nueva norma, se aplica la norma anterior teniendo en cuenta la consolidación de tal figura jurídica y por ende la imposibilidad de incoar la acción fiscal..."; así las cosas, y teniendo en cuenta la ley 610 de 2000 que relaciona en el **"ARTÍCULO 9º. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.** La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o los actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde el último hecho o acto.*

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir de la expedición del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.

El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la acción civil o incidente de reparación integral en calidad de víctima en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública".

*Así las cosas, el equipo auditor realizó revisión de las vigencias de la cartera de impuesto predial presentada por el municipio de Armero Guayabal que a la fecha se encuentra prescrito, es decir los valores adeudados por este concepto desde la vigencia 2011 al 2015, información que se presenta en detalle en la siguientes tablas y teniendo en cuenta el fenómeno de la caducidad de la acción fiscal relacionado en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, para el presente caso no opera, de esta forma se calcula un presunto daño patrimonial para el municipio de Armero Guayabal en cuantía de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS MONDA CORRIENTE (\$656.895.031.00)** Como se relaciona a continuación:*

De conformidad con lo establecido en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, Reglamento Interno de Cartera y según los términos del procedimiento descrito en el Estatuto Tributario, las alcaldías municipales y toda entidad pública obligada a recaudar rentas, deben velar en el procedimiento por el cumplimiento de los principios rectores del debido proceso y de la función administrativa contenido en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, como también en el artículo 1 de la Ley 1066 de 2006; allí se establece que los servidores que tengan a

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

su cargo el recaudo de las obligaciones a favor del Tesoro Público, deberá realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el fin de obtener liquidez para el erario.

En el Municipio de Armero Guayabal Tolima, se presenta una clara deficiencia en gestión y recaudo de la cartera del Impuesto Predial, al no manejar la cartera conforme a lo establecido en la Ley 1066 de 2006, donde se evidencia fallas en el manejo de políticas de recaudo, igualmente inoperancia administrativa en la consecución coordinada de mecanismos internos que permitan el avance procedimental y de trámite, y por último inerte voluntad administrativa para la determinación de la obligación tributaria en el ejercicio de su cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial unificado, como se demuestra con la omisión de la administración municipal en ejercer dichos procesos en el recaudo de cartera.

La situación anterior genera la prescripción de la acción de cobro y la extinción de la obligación tributaria de los contribuyentes, al no interrumpirse estos con la notificación del mandamiento de pago, o con el trámite de otorgamiento de facilidades para el pago, ni tampoco con la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa, entre otros, impidiéndose el recaudo de estos recursos propios, generando así bajos niveles de gestión administrativa y fiscal por parte del Municipio de Armero Guayabal Tolima, situación que ocasiona la disminución y menoscabo los recursos públicos.

*En cuanto a las prescripciones en el impuesto predial, y por presunto manejo indebido en el sistema coactivo y persuasivo de las rentas, a la fecha se encuentra prescrita la cartera de las vigencias 2011 al 2015, por valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS MONDA CORRIENTE (\$656.895.031.00)**, siendo esto una pérdida para el Municipio de Armero Guayabal Tolima, detrimento al patrimonio público y por ende un daño fiscal. (...)"*

Para el efecto téngase en cuenta la relación de las facturas de impuesto predial vistas a folios 251 al 294 del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal No.028 del 19 de mayo de 2022, correspondiente a las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015.

A través del Auto No. 028 de fecha 19 de mayo de 2022, se profiere la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal ante la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL de ARMERO GUAYABAL – TOLIMA, vinculando como presunto responsable fiscal a **JHON WILSON ALVAREZ RAMIREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.395.646 de Ibagué – Tolima, en calidad de Secretario de Hacienda para el periodo comprendido entre el 01-11-2016 al 31-12-2019, **DIEGO FERNANDO GARCIA LINARES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.468.016 de Armero Guayabal – Tolima, en calidad de Secretario de Hacienda para el periodo comprendido entre el 02-01-2020 a la fecha, **JENNY JIMENEZ URUEÑA** identificada con cédula de ciudadanía No. 65.500.852 de Armero Guayabal – Tolima, en calidad de Secretaria de Hacienda para el periodo comprendido entre el 01-01-2012 al 31-12-2015, **MARYURI LAMILLA MEDINA** identificada con cédula de ciudadanía No. 36.302.124 de Neiva – Huila, en calidad de Secretario de Hacienda para el periodo comprendido entre el 01-01-2016 al 31-10-2016,

460

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL		
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
	AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

MAURICIO CUELLAR ARIAS identificado con cédula de ciudadanía No. 14.274.262 de Armero Guayabal – Tolima, en calidad de Alcalde para el periodo comprendido entre el 01-01-2012 al 31-12-2015, **CARLOS ALFONSO ESCOBAR PEÑA** identificado con cédula No. 14.272.596 de Armero Guayabal – Tolima, en calidad de Alcalde para el periodo comprendido entre el 01-01-2016 al 31-12-2019 y **MEDARDO ORTEGA FONSECA** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.590.052 de Arauca – Arauca, en calidad de Alcalde para el periodo comprendido entre el 01-01-2020 a la fecha, para la época de los hechos. y en calidad de tercero civilmente responsable a la compañía aseguradora **LA PREVISORA S.A.**, auto de apertura que fue debidamente notificado a las partes, y que a pesar de ser requeridos a rendir versión libre y espontánea, solo fue posible recaudar la del señor **JOHN ALEXANDER RUBIO GUZMAN** y la compañía aseguradora **LA PREVISORA S.A.** identificada con Nit, 860.002.400-2, por intermedio de su apoderado de confianza el **Dr. OSCAR IVAN VILLANUEVA SEPULVEDA**, allegó escrito de defensa el día 08 de junio de 2022 (folios 350 al 351).

Ⓞ

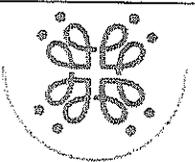
Que mediante auto No. 010 del 25 de abril de 2025, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal del Contraloría Departamental del Tolima, ordenó el archivo por no mérito de la acción fiscal, al no lograrse probar la existencia de una conducta gravemente culposa y la existencia de un daño patrimonial, situación que por sí sola impide imputar responsabilidad ante la ausencia de requisitos sustanciales.

La Contralora Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante auto que resuelve grado de consulta de fecha 26 de mayo de 2025, revocó la decisión de archivo proferida por esta dirección y en consecuencia continuar con las actuaciones procesales a que hubiere lugar, con base en las siguiente exposición de motivos:

"(...) De lo anterior, se resalta que al ser una obligación de medio, se deben consumir oportunamente los actos tendentes a lograr la finalidad del cobro coactivo. Esto es, agotar el procedimiento del cobro coactivo, siendo diferente la obligación de obtener un resultado, pues existirán situaciones donde resulte imposible obtener el pago, como por ejemplo cuando se haya probado la reiterada verificación de la administración sobre la insolvencia del deudor.

Ahora bien, evidencia este despacho que el presunto detrimento patrimonial se causó por la prescripción de la cartera a favor del Municipio de Armero Guayabal por valor de \$656,895,031 de las vigencias de 2011 a 2015, a lo que la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal argumentó que existía gestión de cobro por parte de la entidad; sin embargo, las pruebas obrantes en el pleno son de la gestión y recaudo realizados en las vigencias de 2016 a 2019.

"Pues como se manifiesta en la visita practicada los días 8, 9, 10 y 11 de agosto de 2023, "verificó la información que reposaba en el archivo central de la administración municipal de Armero Guayabal, en lo que respecta a la correspondencia de la Secretaría de Hacienda emitida en las vigencias fiscales 2011-2012-2013-2014 y 2015, se constató que no existe ningún documento que acredite la realización de alguna actividad relacionada con el cobro del impuesto predial tanto de forma persuasiva como coactiva".

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Por lo anterior, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal concluyó que no existe información completa en medio físico de la gestión realizada por haberse perdido la información que reposaba en los archivos, situación que se encuentra aún más grave, pues dentro del plenario no hay denuncia alguna sobre la pérdida de la información que acreditaría y/o respaldaría la gestión realizada para el cobro de la cartera del impuesto predial para las vigencias 2011-2015.

Además, respecto del recaudo realizado frente a las vigencias 2017 a 2019, que tuvo un porcentaje del 91.85%, lo que lleva a concluir que la gestión de recaudo estuvo ajustada y fue efectiva por parte de la Administración Municipal de Armero Guayabal, pero, en vigencias que no son objeto de reproche dentro del presente proceso fiscal.

Así las cosas, es evidente para este Despacho que, no hay material probatorio que logre desvirtuar el elemento esencial del presente proceso, es decir, no se puede acreditar la gestión de cobro por parte de la Administración Municipal de las vigencias 2011 a 2015, pues al no existir resoluciones de prescripciones, se desconoce si frente al recaudo del municipio se han realizado pagos para estas vigencias o la gestión necesaria de cobro."

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el proceso de responsabilidad fiscal se encuentra en etapa de apertura, esta dirección considera conveniente proceder a decretar algunas pruebas de oficio, con el propósito de complementar el acervo probatorio que conlleve al esclarecimiento de los hechos, teniendo como directriz las razones esbozadas en el grado de consulta.

Sobre el tema de la carga de la prueba, existen sendas sentencias del Consejo de Estado, Sentencia del 24 de febrero de 2005, exp: 14937. Citado en: Sección Tercera, Sentencia de abril 28 de 2005, C. P. Germán Rodríguez Villamizar, Exp. 14786; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de abril 21 de 2004, C. P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp. 14651, en conclusión:

La carga de la prueba es "una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos.

Así pues, la carga de la prueba expresa las ideas de libertad, de autorresponsabilidad, de diligencia y de cuidado sumo en la ejecución de una determinada conducta procesal a cargo de cualquiera de las partes.

El contenido material que comporta la carga de la prueba está determinado por la posibilidad que tienen las partes de obrar libremente para conseguir el resultado jurídico (constitutivo, declarativo o de condena) esperado de un proceso, aparte de indicarle al juez cómo debe fallar frente a la ausencia de pruebas que le confieran certeza respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento".

En los procesos referentes al caso en concreto, de los cuales conoce fiscalmente este ente de control, procesalmente no hay particularidades en torno a la "carga de la prueba" diferentes a las que consagra el Código General del Proceso, en su artículo 167: "Incumbe

461

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares....". Vía de remisión contemplada en el artículo 66 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

Frente a las solemnidades que deben reunir las pruebas debe advertirse que la conducencia de estas es la comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio; es decir la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho.

En cuanto a la pertinencia es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso.

La utilidad en términos generales implica su capacidad procesal para producir certeza o poder de convencimiento sobre los hechos que pretenden probar.

Ha dicho el legislador respecto de las características de las pruebas (...) "en el sentido de que la conducencia se predica de la prueba y la pertinencia de los hechos materia del proceso, pero ninguna prueba será conducente sino es apta para llevarnos a la verdad sobre los hechos objeto del procesamiento, que a su vez son los únicos pertinentes¹. Son dos caracteres inseparables, porque si la prueba nos guía a establecer hechos completamente ajenos al proceso, no sólo es impertinente sino que también resulta inconducente, pues se ha separado drásticamente del único objeto señalado en el proceso como plan de acción. La conducencia sólo puede apreciarse a través de una relación de la prueba con los hechos (pertinencia)"².

De lo anterior, debe decirse que las pruebas conducentes, pertinentes y útiles al proceso son aquellas que dentro del tracto probatorio y escudriñado su potencial no deje al operador duda alguna para su aplicación e interpretación. En tal ejercicio y en concordancia con la primigenia política establecida en el artículo 29 literal cuarto (4) el cual hace referencia al debido proceso y reza en sus apartes finales "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su

¹ Sentencia de 30 de junio de 1998 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado JORGE ANÍBAL GÓMEZ

² PARRA QUIJANO JAIRO. Manual de Derecho Probatorio. Edición 14. Pág. 154.

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL		
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
	AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".
(Subrayado del despacho).

Respecto a los medios de prueba, debemos seguir el orden de remisión previsto en el artículo 66 de la Ley 610 de 2000, arribando al artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone que durante la actuación administrativa serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil, cuerpo normativo que fue derogado por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

Se debe precisar que el principio de remisión debe aplicarse con una salvedad que consiste en que las disposiciones que se empleen para suplir aspectos no previstos en dicha norma, han de ser compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal, esto es, con un proceso administrativo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1564 de 2012, además de los medios de prueba legalmente permitidos, se han establecido otros orientados específicamente a la determinación de la responsabilidad fiscal que son: **La visita especial, el informe técnico, la declaración juramentada y los documentos.**

Estando dentro del término señalado en el artículo 107 de la Ley 1474 de 2011, considera el despacho pertinente, conducente y útil, la práctica de oficio de la siguiente:

Oficiar a la Administración Municipal de Armero Guayabal - Tolima, para que con destino al presente proceso No. 112-036-021, remita la siguiente información:

1. Informar cuales fueron las gestiones adelantadas por la Administración Municipal de Armero Guayabal – Tolima, frente a la perdida de documentación del archivo central correspondiente a la Secretaría de Hacienda durante las vigencias 2013, 2014 y 2015.
2. Certificar e indicar el porcentaje de recaudo por concepto de impuesto predial durante las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016.
3. Certificar e indicar el número de funcionarios de planta adscritos a la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal – Tolima, durante las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
4. Informar a este despacho cuales fueron las gestiones de cobro persuasivo adelantadas por la Administración Municipal de Armero Guayabal – Tolima, durante las vigencias 2013, 2014 y 2015.

En lo que tiene que ver con las pruebas documentales allegadas por los presuntos responsables fiscales y tercero llamado en garantía, estas se tendrán por incorporadas al cumplir los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad, las cuales resultan ser idóneas y necesarias para esclarecer los hechos que a través de este investigativo se requieren resolver.

462

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL		
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
	AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Respecto de los requisitos de las pruebas, se tiene que son **conducentes**, porque la **prueba documental**, está legalmente constituida a la luz de lo dispuesto en la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1564 de 2012, y de igual manera, están orientados específicamente a demostrar los hechos alegados y en efecto determinar la responsabilidad fiscal o no de los vinculados.

De tal modo, resulta **pertinente y útil**, valorar dentro del material de evidencia, las pruebas documentales por medio de las cuales se puede obtener un conocimiento razonable y fehaciente bajo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto a los hechos materia de investigación al igual que determinar las certeza o no respecto al acaecimiento del detrimento patrimonial.

La pertinencia por su parte, se refiere a que la prueba a decretar verse sobre los hechos del proceso, y en especial sobre los determinados en esa petición. De la misma forma que en nuestras conversaciones diarias, las dirigimos sobre un mismo asunto, con el objeto de que sea posible lógica y materialmente la comunicación, de la misma forma, las pruebas que informan una actuación procesal, deben dirigirse a los mismos hechos del proceso.

La utilidad de la prueba tiene que ver con *"... el aporte que puede llevar al proceso para cumplir el fin de crear certeza de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos, el poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva"*

Es decir, que los elementos aducidos al proceso con la intención de demostrar cierta circunstancia, deben tener la vocación de servir para el fin concebido, tal como es el caso de llevar convencimiento al funcionario fallador; pero cuando dicha prueba no es útil para brindar claridad a la materia entonces se torna superflua. Así: *"...la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que este solo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos valiéramos de una metáfora, podríamos decir que el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para pronunciar el fallo y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente necesario"*

Entonces, la utilidad de la prueba compromete no sólo la certeza del fallador sino también los principios de la función pública, ya que ambos concurren en la idea de la eficacia, economía y celeridad, principios que buscan la realización de una administración ágil y transparente en la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, motivo por el cual, la práctica de pruebas de hechos que se encuentren esclarecidos dentro del proceso, o de pruebas que tiendan a demostrar un mismo hecho, por la redundancia establecida, resultan superfluas frente a los intereses de la búsqueda de la verdad y eficacia que deben componer la administración pública.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho,

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la controlaría del ciudadano</i></p>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL		
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF		
	AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR y PRACTICAR de oficio por ser conducente, pertinente y útil, la práctica de la siguiente prueba:

Requerir a la Administración Municipal del Armero Guayabal - Tolima, al correo electrónico contactenos@armeroguayabal-tolima.gov.co para que dentro del término de quince días (15) contados a partir del recibido de la presente, so pena de incurrir en conducta sancionable como lo establece los Artículos 99, 100 y 101 de la Ley 42 de 1993, con destino al proceso de responsabilidad fiscal No. 112-036-2021, allegue la siguiente información a la Secretaría General de la de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el Piso 7 de la Gobernación del Tolima o al correo electrónico ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co:

1. Informar cuales fueron las gestiones adelantadas por la Administración Municipal de Armero Guayabal – Tolima, frente a la perdida de documentación del archivo central correspondiente a la Secretaría de Hacienda durante las vigencias 2013, 2014 y 2015.
2. Certificar e indicar el porcentaje de recaudo por concepto de impuesto predial durante las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016.
3. Certificar e indicar el número de funcionarios de planta adscritos a la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal – Tolima, durante las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
4. Informar a este despacho cuales fueron las gestiones de cobro persuasivo adelantadas por la Administración Municipal de Armero Guayabal – Tolima, durante las vigencias 2013, 2014 y 2015.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR valor probatorio y tener por incorporados al expediente 112-036-2021, los documentos vistos a folios 351, 355 al 367, 378, 388 al 397 y 399 al 406.

ARTICULO TERCERO: Fíjese para la práctica de las pruebas decretadas en esta providencia el término establecido en el artículo 107 de la Ley 1474 de 2011, líbrense los oficios correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente proveído por estado conforme lo indicado en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

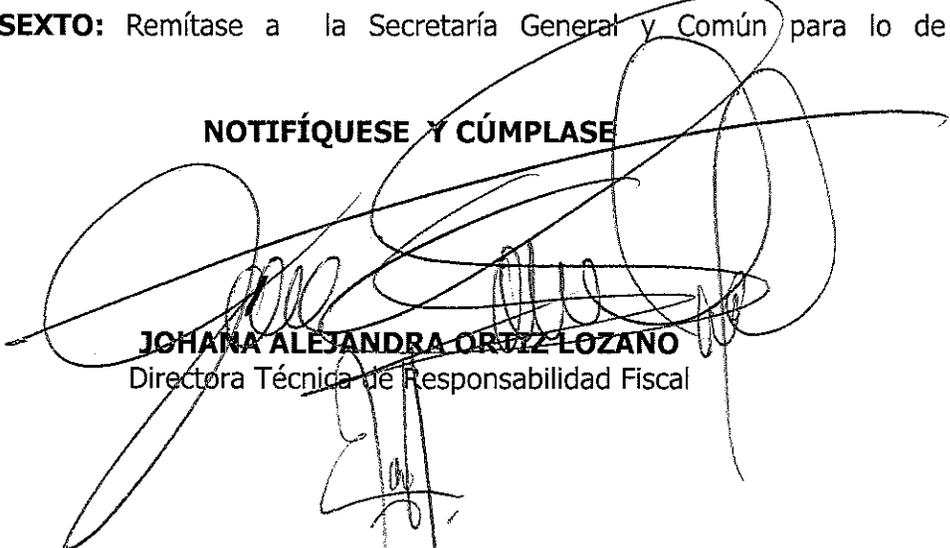
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

463

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>en controloría del ciudadano</i>	DIRECCION TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	
	PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL-RF	
AUTO QUE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	CODIGO: F21-PM-RF-04	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

ARTICULO SEXTO: Remítase a la Secretaría General y Común para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JOHANA ALEJANDRA ORTIZ LOZANO
Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal

ANDRES MAURICIO AYALA MUNAR
Investigador Fiscal